

**Facultad de Derecho  
y Ciencias Sociales y Políticas  
UNNE**

# **XVIII Jornadas de Comunicaciones Científicas**

**2022**

**Corrientes - Argentina**





### **Dirección General**

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas – UNNE  
Dr. Mario R. Villegas

### **Dirección Editorial**

Secretaría de Ciencia y Transferencia  
Dra. Lorena Gallardo

### **Coordinación editorial y compilación**

Dra. Lorena Gallardo  
Esp. Martín M. Chalup

### **Asistentes – Colaboradores**

Lic. Agustina M. Bergadá  
Abg. M. Benjamin Gamarra,  
Mg. María Belén Mattos Castañeda  
Abg. Lucía M. Sbardella

### **Fotografías**

Nicolás Gómez

### **Edición**

Secretaría de Ciencia y Transferencia  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas  
Universidad Nacional del Nordeste  
Salta 459 · C.P. 3400  
Corrientes · Argentina

### **Comisión Evaluadora**

Dr. Agustín Carlevaro  
Dr. Daniel Denmon  
Esp. Elena Di Nubila  
Dr. Hernan Grbavac  
Dra. Lorena Gallardo  
Abg. M. Benjamin Gamarra  
Dr. Mauricio Goldfarb

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas UNNE

XVIII Jornadas de Comunicaciones Científicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas - UNNE / compilación de Lorena Gallardo; Martín Miguel Chalup; coordinación general de Lorena Gallardo. - 1a edición especial - Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, 2022.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-3619-82-3

1. Derecho Ambiental. 2. Derecho Administrativo. 3. Derecho. I. Gallardo, Lorena, comp. II. Chalup, Martín Miguel, comp.  
CDD 340.07

## LOS SUJETOS VULNERABLES EN LOS TIEMPOS ACTUALES. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

**Claps, Sergio L; Burgoa, Romina A.**

*sergioclaps@hotmail.com*

### RESUMEN

El presente informe radica en determinar la real situación de hipervulnerabilidad de los consumidores en el contexto de la post pandemia, para ello realizamos una comparación de diferentes situaciones jurídicas acaecidas desde el año 2019 a la actualidad, y la forma de resolución de conflictos en sede administrativa y judicial.

Durante la pandemia, las relaciones jurídicas obligaciones –de consumo- se vieron alteradas. En los tiempos actuales, empezamos a ver los efectos que han surgido justamente de esa alteración en las relaciones obligaciones, como así también la aparición de nuevos sujetos vulnerables.

Por lo cual pretendemos desde esta investigación profundizar en las causas y soluciones que las partes contratantes tendrán que brindar a la problemática en cuestión.

### PALABRAS CLAVE

Hipervulnerables, actualidad, post pandemia.

### INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los términos “vulnerabilidad” o “hipervulnerabilidad” se ven cada vez más ampliados, incluyendo nuevas situaciones fácticas o jurídicas ocasionales o permanentes, que no existían con anterioridad a la pandemia. Es así que nacen nuevos sujetos vulnerables ante un escenario jurídico bastante complejo. Aquí presentamos algunos de esos sujetos vulnerables y la forma justamente de enfrentar dichas. Nos planteamos que hacer frente a la imposibilidad de cumplimiento, en materia obligacional y por sobre todo en lo que al derecho de Daños refiere. Es justamente la producción del daño y la situación de hipervulnerabilidad en la que se encuentran cada vez mayor parte de la población lo que nos lleva a analizar diferentes alternativas de solución.

Planteamos como una posible alternativa la renegociación del contrato frente a la crisis económica que acarrea la pandemia, esto clara está, siempre y cuando los contratos puedan ser readecuados.

El derecho de acceso al consumo debe robustecerse ante situaciones de agravada inferioridad, subordinación o indefensión. El tratamiento de la problemática de los denominados consumidores hipervulnerables ha cobrado especial trascendencia en los últimos años, habiendo gozado en algunos casos de recepción legislativa. La inferioridad agudizada del hipervulnerable puede residir en ciertas condiciones físicas o personales, como ocurre con los niños, niñas y adolescentes, las personas con alguna discapacidad, las personas ancianas, en situación de pobreza o socialmente desfavorecidas y quienes carecen de la necesaria dotación cultural, sea estructural (analfabetos o analfabetos relativos) o coyuntural (emigrantes o turistas), entre otros.

Cuando hablamos de nuevos sujetos vulnerados, a quienes primero debemos señalar es a aquellos que pretenden un acceso adecuado a un derecho tan importante como la “salud”.

Partiendo de esa base, se han interpuesto una serie de medidas cautelares y de acciones de amparo a los fines de hacer efectiva dicha protección.

Jurisprudencialmente, ya hay varios pronunciamientos en materia de salud, donde el eje de la motivación estuvo puesto en el COVID-19.

Así se hizo lugar a una acción de amparo, tras el riesgo que corría la hija de la actora ante la pandemia del coronavirus (COVID-19), por ser una paciente con enfermedades respiratorias (Síndrome del Wolf). En consecuencia se ordenó a la obra social que provea a la menor la cobertura integral de enfermería domiciliar las 24 horas del día, en tanto “la acción de la demandada de reducirle las horas de la enfermería



domiciliaria sería considerado como condenarla a la muerte, ya que se trata de una paciente que depende del oxígeno las 24 horas”

En otro caso se dispuso que la autoridad pública competente extienda para el menor solicitante –quien padece síndrome de autismo severo– un salvoconducto que le permitiera desplazarse –junto a un adulto responsable y nunca a menor distancia de 2 metros de cualquier persona– en las cercanías de su domicilio, en el horario de 10 a 12 hs. y pese al aislamiento social, preventivo y obligatorio, “pues el menor –al no salir– tendría tendencia a la autolesión y también podría lastimar a su entorno familiar”

En lo que a materia alimentaria refiere se han dictado una serie de resoluciones a los fines de procurar el acceso a ellos, y establecer un control de precios sobre ciertos productos que conformaban la canasta básica. También cabe agregar que, en fecha 19/03/2020, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores emitió la Disposición N° 3/2020, mediante la cual se creó el “régimen informativo exclusivo de publicación de precios máximos de referencia para una canasta básica de productos de consumo discriminada para cada provincia.

Ya se hizo lugar a una medida autosatisfactiva promovida por la Defensoría del Pueblo de Formosa, para que se ordene a titulares de tres comercios que den estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución 100/2020 de la SCI; respetando los precios máximos de venta al consumidor final.

En lo que al acceso a los servicios públicos refiere, el Decreto N° 311/2020 se dispuso que: “Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias... en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso” (artículo 1).

Algunas provincias, como Buenos Aires, adhirieron al Decreto 311/2020, y expresamente legislaron que los prestadores de los servicios públicos locales, como los de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales, no puedan suspender servicios a los usuarios.

En materia de vivienda: Ya se verificaban precedentes que se venían orientando hacia la adecuación contractual. Una medida cautelar innovativa dispuso que las partes renegocien los términos de un crédito UVA, para que pueda ser abonado por el deudor. El fallo resolvió que el monto de la cuota no podía tener una incidencia superior al 20% del salario bruto que el moroso percibe.

Existen en el marco actual, otros sujetos vulnerados o hipervulnerados que no podemos dejar de mencionar y son aquellos que quedan excluidos por ejemplo de derechos esenciales como la educación, por falta de acceso a servicios tecnológicos o de incrementos en las cuotas de las escuelas privadas, lo cual también ha generado la intervención del estado y de la justicia.

Los colegios privados en convenio con el Ejecutivo Nacional acordaron congelar el valor de los aranceles hasta que concluyan las medidas de aislamiento social y preventivo obligatorio; y retrotraer los aumentos que se hubieren producido con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto N° 260/2020. Asimismo se han comprometido a flexibilizar, reprogramar o extender las fechas de vencimientos de pago de cuotas o aranceles, restringir los recargos financieros por mora en el pago (intereses), y suprimir las multas y otras penalidades o accesorias durante un plazo no menor al del aislamiento social y preventivo obligatorio.

Indubitablemente el mercado del turismo, hotelería y viajes es uno de los que mayor impacto recibió como consecuencia de la pandemia y también se han dictado una serie de medidas a los fines de paliar los daños que se han producido en ese sector.

Analizadas así los diferentes sujetos como así también los diferentes escenarios presentados, nos proponemos esgrimir algunas soluciones que consideramos pasibles de aplicar y que la justicia conforme hemos ido señalando, se ha ocupado de encauzar.

## RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las diferentes situaciones fácticas que se han ido presentando, y las que seguramente seguirán, debemos marcar la importancia del Derecho de Daños, el cual a través de sus distintas funciones ha servido de herramienta para la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

La función preventiva tuvo vital importancia práctica para la protección de los más vulnerables, por medio de las medidas cautelares de no innovar o innovativas o incluso por intermedio de medidas autosatisfactivas.

La función punitiva en materia del Consumidor resultó y resulta de trascendental importancia para lograr el fin perseguido.

Como algunas herramientas sistemáticas proponemos:

La ya nombrada prevención o función preventiva: En nuestra doctrina se han postulado diversas exégesis acerca de los supuestos previstos en el artículo 1710 del CCYCN. El Dr. Galdós, distingue tres acciones: evitar la producción del daño (inc. a); evitarlo o disminuirlo adoptando un comportamiento más exigente (inc. b); no agravarlo (inc. c).

Los dispositivos proporcionan un andamiaje normativo, a partir del cual se puede justificar que la pretensión preventiva de los consumidores pueda encarrilarse mediante: medidas cautelares clásicas, tutela anticipada autónoma, autosatisfactivas, mandatos preventivos, sentencia anticipada despachada como cautelar innovativa, medidas preventivas genéricas y específicas de derecho sustancial.

La imposibilidad de cumplimiento: Íntimamente conectado con el casus se encuentra la reglamentación de la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento. Tanto así que algunos autores cuestionan la autonomía de esta regulación en los artículos 955 y 956 del CCYCN.

La Suspensión del cumplimiento: Para completar el esquema de los ítems anteriores, debe contemplarse la hipótesis de suspensión del cumplimiento del artículo 1031 y la ut supra aludida tutela preventiva del 1032 del CCyC, cuando media fuerza mayor; aunque no hay referencia, en el contenido de tales dispositivos, a los conceptos de fuerza mayor o caso fortuito.

La gran novedad viene dada por esta tutela preventiva del artículo 1032 del CCyC, que habilita, por acción o excepción, la suspensión de la prestación propia, no frente al incumplimiento, sino ante el peligro de ello (en los términos empleados en el derecho comparado) o, en rigor, ante la grave amenaza de daños (como reza el artículo 1032). La distinción terminológica deviene pertinente, puesto que un sector de la doctrina advierte que puede haber “peligro de incumplimiento” sin “grave amenaza de daño” y viceversa.

La frustración del fin del contrato: Dicha novedosa regla, de especial interés para los consumidores, ya era aceptada por la doctrina y la jurisprudencia. La frustración de la “causa fin” del contrato actualmente está expresamente consagrada en el artículo 1090 del CCyC, y se conecta con el artículo 1013.

El instituto persigue la ineficacia funcional del contrato, pero no desencadenará la responsabilidad civil, en la medida que actúa de modo semejante a una causal de exoneración del incumplimiento. Las prestaciones ya cumplidas quedarán firmes. Las prestaciones pendientes no deberán cumplirse, si cuentan con contraprestación. Si ya se pagó, se requerirá la devolución. Si medió gasto en el cumplimiento, deberá restituirse lo gastado.

Teoría de la imprevisión: Otra tecnología es la ya conocida excesiva onerosidad sobrevenida, teoría de la imprevisión o hardship (cuando es convencional). No cabe duda que la pandemia del COVID-19 califica como acontecimiento extraordinario e imprevisto que incide en la eficacia de los contratos. Pero sugiere Rivera que lo que se debe analizar, a los fines del encuadramiento en la figura, es la existencia de una imprevisibilidad concreta que cause una excesiva onerosidad, en el sentido de ausencia de “correlatividad” de las prestaciones derivadas del contrato, esto es, una desmesura en la onerosidad, en tanto medida racionalmente con la otra prestación.

Caso fortuito o fuerza mayor: Pacíficamente se admite que esta pandemia encuadra en la clásica figura del caso fortuito o fuerza mayor, en tanto se trata de un acontecimiento imprevisible o irresistible. Su principal efecto es la exoneración de la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados con el incumplimiento o por el cumplimiento tardío.

Conclusiones

1. Necesitaremos de una Legislación de transición, y jueces sensatos que sepan encontrar una solución equitativa mediante una interpretación armoniosa y respetuosa del ordenamiento jurídico integralmente considerado. Es decir, creemos que existen tres vías posibles para enderezar o restituir el equilibrio, tales son: la ley, la voluntad de las partes, el juez. 2. La crisis puede impactar de distintas maneras y en distintos grados a ambas partes (Deudor- Acreedor). 3. La situación requiere de nosotros los operadores de la justicia, requiere claramente de la justicia y de los jueces, y más aún de principios como los de la buena fe y la equidad. 4. El sistema sustancial normativo brinda soluciones prácticas a las diferentes situaciones vividas, pero no pueden ser consideradas de manera aislada, deben considerarse en un todo. Tampoco podemos dejar de considerarlas en relación con los derechos humanos fundamentales en un todo con la Constitución Nacional.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CSJN. (22/4/2008). *Ledesma, María Leonor c. Metrovías SA*, (331:819, considerando 9).
- Suprema Corte de Justicia de Mendoza. (26/07/2002). *Bloise de Tucci, Cristina c. Supermercado Makro S.A.*”.
- Cavanillas Múgica, S. (1990). *La protección del subconsumidor en la normativa sobre responsabilidad civil por productos o servicios defectuosos*. Estudios sobre Consumo, 18. Ministerio de Sanidad y Consumo: Instituto Nacional del Consumo de Madrid. 44–45.
- Garrido Cordobera, L. M. R., (2012). *La protección del consumidor turista*”. La Ley.
- Juzgado de 1ª Instancia Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (22 /03/2020). *Asesoría Tutelar CAYT N° 2 c/GCBA s/Medida Cautelar Autónoma*.
- Juzg. Civ. Com. N° 6, Formosa. (29 de marzo de 2020 ). *Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa vs. El Pajarito S.A. y/u otros s. Medida autosatisfactiva*.
- Juzgado en lo Civil y Comercial n° 4 de Dolores. (16/12/2019). *Pieron Oscar Ebert c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires (Sucursal General Lavalle) s/ Medidas cautelares, (Traba/levantamiento)*”.
- Galdós, J. (2020). La tutela preventiva del coronavirus en el Código Civil y Comercial de la Nación. *Diario La Ley*. p. 4.
- Sahián, José H. (2020). La Crisis del Coronavirus y el Derecho Argentino - La Crisis del Coronavirus y el Derecho Argentino.
- Leiva Fernández, L. F. P. (2016). Comentario a los artículos 957 a 1122. Alterini (coord.). *Código Civil y Comercial Comentado*, (T. 5, 550 pág., 2 ed. Actualizada). La Ley

#### FILIACIÓN

**AUTOR 1:** Director/a - PEI-FD 2021/006 - Facultad de Derecho - UNNE.

**AUTOR 2:** **Docente investigador. –PEI- FD 2021/006 –Facultad de Derecho –UNNE.**